



Medio Ambiente y Urbanización is a sister journal to [Environment and Urbanization](#). The two journals have similar editorial policies but only a small overlap in what they publish as *Medio Ambiente y Urbanización* concentrates on Latin America while *Environment and Urbanization* covers all regions of the world. *Medio Ambiente y Urbanización* receives support from the Royal Danish Ministry of Foreign Affairs (DANIDA).

Publisher: [IIED-América Latina](#)

[Related content](#)

Volume 76, Number 1, April 2012

Descentralización, Gobernanza y Desarrollo Local

[< previous issue](#) | [all issues](#)

Update marked list

- | | |
|--------------------------|--|
| <input type="checkbox"/> | <p>F Descentralización, Gobernanza y Desarrollo Local
pp. 5-8(4)
Authors: Brenner, Ludger; van Lindert, Paul; Verkoren, Otto</p> |
| <input type="checkbox"/> | <p>F La planificación del desarrollo local bajo la descentralización y gobernanza local. Una reseña interpretativa de la literatura.
pp. 9-48(40)
Authors: van Lindert, Paul; Verkoren, Otto</p> |
| <input type="checkbox"/> | <p>F La Descentralización en Estados Unitarios: Una Aproximación a los Casos de Bolivia, Chile, Colombia y Paraguay
pp. 49-68(20)
Authors: Rodríguez-Acosta, Cristina A.</p> |
| <input type="checkbox"/> | <p>F “Este conocimiento nadie nos lo va a quitar, el dinero o cualquier cosa que tienes todo te pueden robar” Canon minero y cambios sociopolíticos en la provincia de Huari, Ancash, Perú.
pp. 69-90(22)
Author: Venturoli, Sofia</p> |
| <input type="checkbox"/> | <p>F ¿Carga o bendición? La respuesta de organizaciones no gubernamentales y gobiernos locales bolivianos a la migración internacional
pp. 91-108(18)
Authors: Nijenhuis, Gery; Bogaardt, Irene; Weenink, Geke</p> |
| <input type="checkbox"/> | <p>F Inversión extranjera directa y desarrollo local. El estado de Coahuila bajo el TLCAN
pp. 109-132(24)
Author: de Bell, Leendert</p> |
| <input type="checkbox"/> | <p>F Participación en políticas públicas en ciudades metropolitanas: La interacción entre organizaciones de la sociedad civil y el estado en el Gran Buenos Aires
pp. 133-162(30)
Author: Rofman, Adriana</p> |

-
- | | |
|--------------------------|---|
| <input type="checkbox"/> | <p>F Evaluación teórica del concepto de sistemas productivos locales y conformación de una propuesta metodológica de análisis
pp. 163-186(24)
Author: <i>Uvario, Katia Lozano M.</i></p> |
| <hr/> | |
| <input type="checkbox"/> | <p>F Desarrollo Local por el vehículo de la Cooperación Internacional Municipal. Entendiendo las conexiones y el contexto desde una perspectiva translocal
pp. 187-210(24)
Authors: <i>Bontenbal, Marike; van Lindert, Paul</i></p> |
| <hr/> | |
| <input type="checkbox"/> | <p>F Desarrollo local participativo y buena gobernanza ambiental: ¿una combinación viable? La experiencia de una Reserva de la Biosfera mexicana
pp. 211-242(32)
Author: <i>Brenner, Ludger</i></p> |
-

Update marked list

[< previous issue](#) | [all issues](#)

Website © 2012 Publishing Technology. Article copyright remains with the publisher, society or author(s) as specified within the article.

“Este conocimiento nadie nos lo va a quitar, el dinero o cualquier cosa que tienes todo te pueden robar”

Canon minero y cambios sociopolíticos en la provincia de Huari, Ancash, Perú.

Introducción

En la teoría política se tiende a vincular los procesos de descentralización con un incremento de democracia y esto último con un mayor desarrollo; un desarrollo que involucre las libertades políticas, es decir la capacidad y la posibilidad de elegir y desplegar una acción política libre (PNUD 2006).

1. Dra. en antropología en la Universidad de Bolonia, Italia, y Maestra en Social Anthropology and Amerindian Studies en la Universidad de St. Andrews, Escocia, es hoy investigadora en la Facultad de Ciencias Políticas de la Universidad de Bolonia. E-mail: Sofia.Venturoli@unibo.it

La evaluación de los niveles de democracia en las diferentes áreas del Perú debe basarse sobre el conocimiento directo y profundo de la práctica de los ciudadanos. Limitarse al estudio de las leyes y de las políticas producidas y decididas por el gobierno central, y consecuentemente por los gobiernos regionales, quedarse en un estudio “teórico” de las normas políticas que deberían producir el desarrollo a través de la descentralización, no permite destacar la diferencia entre la norma y la acción, no permite evaluar la real situación del contexto analizado.

De hecho, cuando las libertades políticas se ejercen en contextos de desigualdad social es muy posible que la acción política haga solo que se reproduzca esa misma desigualdad (PNUD 2006). Los procesos de desarrollo político y social deben estar asociados a finalidades específicas que deben ser claras y compartidas por los ciudadanos (Drydyk 2005). Drydyk habla de *input side*, es decir la posibilidad de acceso a los instrumentos democráticos y *output side*, o sea las acciones que los ciudadanos llevan a cabo mediante aquellos instrumentos democráticos.

Para analizar los efectos y la eficacia de los instrumentos de la democracia, en nuestro caso para ver si los instrumentos de la descentralización pueden ser instrumentos de una mayor participación política, lo que nos parece fundamental es el análisis del contexto socio-cultural

a través de un enfoque antropológico y etnográfico. Se trata de comprender si nos encontramos ante una “participación interactiva” (Alkire 2000) es decir una participación política construida sobre un análisis compartido por los ciudadanos que lleve a acciones participadas y al fortalecimiento de las decisiones políticas.

No es suficiente que tales procesos pretendan ser democráticos solamente en base a la norma. Por esta razón el análisis del contexto socio-cultural es crucial para comprender de qué forma la libertad política, y en nuestro caso los instrumentos de la descentralización, pueden ser medios para el desarrollo.

La metodología etnográfica y el análisis antropológico, desarrollados mediante un extenso trabajo de campo de un contexto específico en áreas relativamente definidas y limitadas, la comprensión de un proceso histórico no solo construido por hechos y datos sino también por formas de pensar, de articular y de construir el espacio político y común en el tiempo, permite el conocimiento de la realidad que muchas veces es muy distinta y lejana a la norma. La recolección de datos mediante una observación participante, y entrevistas informales permite aclarar prácticas y describir realidades no sólo culturales y sociales sino también políticas que muy a menudo no reflejan la norma establecida. Las leyes que un gobierno intenta implementar para producir un resultado no siempre en la prác-

tica de los ciudadanos y de los gobiernos locales resultan seguir las previsiones. Lo que estamos proponiendo es un análisis de la realidad peruana, del proceso político de descentralización, de los cambios políticos que se están desarrollando desde hace pocos años, partiendo desde un punto de vista micro, es decir subiendo desde abajo, desde la práctica social para construir una visión macro. Lo que queremos evidenciar en esta contribución son los cambios reales que una política de descentralización, promovida a través de la recepción de grandes financiamientos a las municipalidades y regiones “afectadas” por proyectos mineros, pueda estimular e impulsar en realidades rurales como las comunidades campesinas de la sierra peruana. Cambios que involucran no sólo la participación política sino también la esfera socio-cultural y económica. Igualmente se propone presentar un ejemplo de gestión que los gobiernos locales hacen de la norma jurídica así como evidenciar el nivel de conocimiento que de ésta tienen los ciudadanos y las autoridades rurales.

Nuestro acercamiento al estudio de la descentralización empieza en una provincia de la sierra del Departamento de

Ancash, Perú, la provincia de Huari, y considera, además de la cabecera provincial (Huari), dos comunidades campesinas que se relacionan cultural, social y políticamente con Huari. San Bartolomé de Acopalca y San Juan de Yacya, son comunidades campesinas reconocidas ante las leyes peruanas y mantienen el título de la tierra desde el siglo XVII. Huari es la cabecera de la Municipalidad Provincial que lleva su nombre, comprendiendo dieciséis distritos. En la provincia de Huari viven 62.000 personas, en un rango de altitud que varía entre 2.150 m.s.n.m. y 6.370 m.s.n.m. En el distrito de Huari, en la homónima provincia, viven alrededor de 9.700 personas de las cuales 4.827 en área urbana y 4.900 en área rural². San Juan de Yacya es una comunidad campesina, actualmente *centro poblado Mayor*, donde viven aproximadamente 1000 habitantes, tomando en cuenta los tres caseríos que entran en su jurisdicción; Puyuuq, Pomachaca, Ichuqpun. San Juan de Yacya se encuentra al sur de Huari y sus tierras comprenden diferentes áreas climáticas y ecológicas³, ubicándose la propiedad comunal entre las laderas de la Cordillera Blanca y la quebrada por donde corre el río Huari. San Bartolomé

2. Los datos proceden del censo que el INE (Instituto Nacional de Estadística) ha efectuado en 2007. Las divisiones políticas del territorio peruano se dividen en regiones, provincias, distritos, municipalidades provinciales, municipalidades distritales, centros poblados (caseríos de área rural) y anexos (o centros poblados menores, pequeños caseríos de área rural). Huari es una Municipalidad Provincial que abarca en su territorio 16 municipalidades distritales, muchos centros poblados y caseríos. En las divisiones del censo nacional, del Instituto Nacional de Estadística, Huari, en cuanto ciudad, se considera como área urbana, los centros poblados mayores y los anexos se consideran como área rural.
3. El área andina se subdivide en regiones naturales en base a la altitud sobre el nivel del mar: la Yunga Fluvial (2150-2300 m.s.n.m.), el área llamada Quechua (2300-3500 m.s.n.m.), la Suni-Jalca (3500-4000 m.s.n.m.), la Puna (4000-4500 m.s.n.m.) y la región Janca (4500-6370 m.s.n.m.). Esto origina diferentes formaciones naturales, climas y microclimas diversos, que permiten una explotación agrícola muy variada (Murra 1972, 2002). En esta área se puede hablar de ‘microverticalidad’, es decir la posibilidad de alcanzar diferentes áreas climáticas que producen distintos tipos de productos en pocas horas de camino; estas son las regiones en donde, como ya sostenía Fonseca (1973), es posible todavía individual un “control vertical” perceptible, colocando el área de vivienda en el medio de dos o más pisos ecológicos fácilmente alcanzables. Se trata de una dimensión diferente con respecto a lo que presenta Murra (1972) sobre la verticalidad y los grandes desplazamientos de grupos humanos para la explotación de áreas ecológicas distintas, aplicable en otras zonas del país (Venturoli 2009).

de Acopalca es también una comunidad campesina oficialmente reconocida antes de la Reforma Agraria, donde viven aproximadamente 600 habitantes y recientemente ha sido elevada también a rango de centro poblado mayor. Las dos son comunidades que viven de agricultura de subsistencia y dependen de la cabecera provincial para un pequeño comercio del excedente, para un ocasional préstamo de mano de obra en cambio de dinero, así como para conseguir bienes de consumo.

En el distrito de San Marcos, que se encuentra en la Provincia de Huari, se desarrolla uno de los grandes proyectos mineros que explotan las riquezas del suelo peruano. Esta explotación no ha

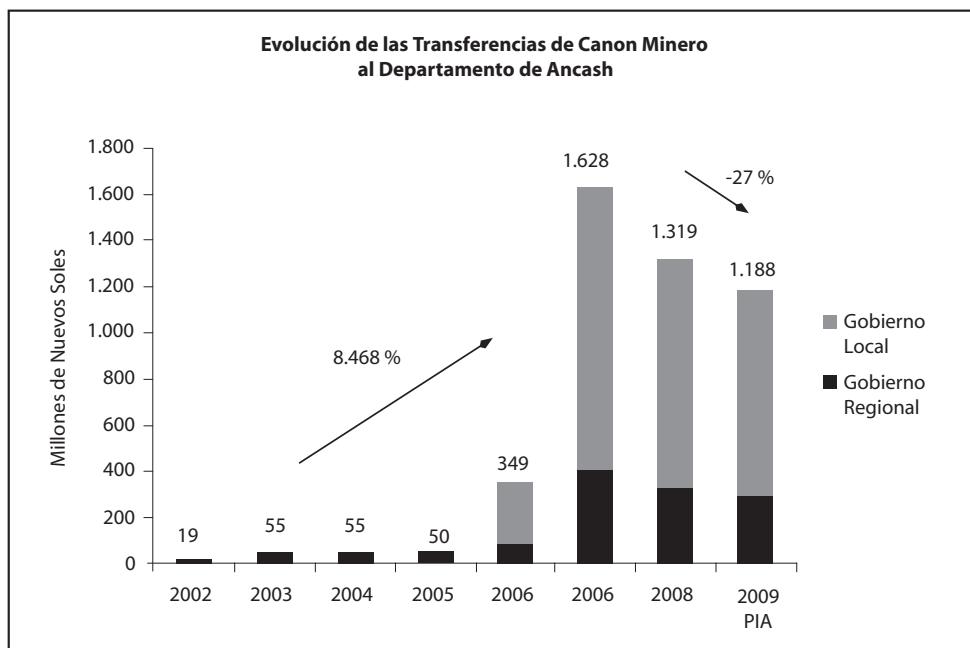
producido grandes beneficios para las comunidades locales hasta cuando parte del impuesto del canon minero empezó a ser distribuido a los gobiernos regionales que deben gastarla mediante proyectos de infraestructuras y de desarrollo. Esta compañía, que explota un yacimiento poli-metálico, sobretodo de cobre y zinc, se llama Antamina, y constituye un proyecto extractivo iniciado en 1996, sobre una mina muy conocida pero casi nunca explotada anteriormente. Actualmente Antamina es una de las compañías más grandes en tratamiento de minerales poli-metálicos a nivel mundial. Cuenta con un reducto de 302 kilómetros que va desde la quebrada Antamina, donde se procede a la explotación y a la elaboración del producto, hasta el

Mapa político de la provincia de Huari



puerto de Punta Lobitos, Huarmey (Venturoli 2010). El canon minero equivale al 50% del total de ingresos y rentas obtenidos por el Estado peruano en la actividad minera, por el aprovechamiento de los recursos minerales, metálicos y no metálicos. En base a las nuevas leyes de Descentralización llevadas a cabo por el último gobierno de Alan García, el Departamento de Ancash ha pasado de recibir S/. 19 millones por transferencias de canon minero⁴ en el año 2002 a recibir S/. 1.319 millones el 2008, lo que suma un total de S/. 3.475 millones (970.300 €) en los últimos siete años

(CAD, 2008). “El año 2008, el Departamento de Ancash, esto es el Gobierno Regional del Departamento de Ancash y los Gobiernos Locales recibieron S/. 1.319 millones de canon minero. De este total, S/. 330 millones se asignaron al Gobierno Regional de Ancash y S/. 899 millones a los Gobiernos Locales. Del monto asignado al Gobierno Regional, S/. 66 corresponden a las dos Universidades Públicas del Departamento de Ancash: Universidad Nacional de Santa (S/. 33 millones) y la Universidad Santiago Antúnez de Mayolo (S/. 33 millones)” (CAD, 2008: 4).



Los montos correspondientes al Gobierno Regional incluyen el 20% de las transferencias de canon minero que a partir del año 2004 éste debe otorgar a las Universidades Públicas del Departamento de Ancash, de acuerdo con la Ley 28077 y el Decreto Supremo 029-2004-EF. Fuente: MEF, Proyecto de Ley de Presupuesto Público 2009. Elaboración: CAD Ciudadanos al Día.

4. El canon está previsto en el artículo 77° de la Constitución Política. Lo regulan la Ley del Canon (N° 27506) – promulgada en julio del 2001 – y sus modificatorias. Además, su Reglamento, aprobado vía Decreto Supremo N° 005-2002-EF en enero del 2002, y sus modificatorias.

Estos montos deben ser utilizados, por ley, a través de proyectos manejados por las autoridades municipales. La posibilidad de manejar los montos procedentes del canon minero, a nivel de gobiernos regionales, provinciales y distritales, ha procurado un florecer de candidatos, al sillón regional, provincial y distrital, que probablemente no se presentan “por amor a su pueblo” (Clorinda, Huari 2006). En

2006 después de las elecciones administrativas, las grandes obras mostraron su cara en el distrito de Huari⁵.

El dinero del canon empezó a ser invertido en obras de infraestructura que comprendían escuelas, plazas en los centros poblados, miradores, locales comunales, mercados, hasta iglesias! Junto con esta infraestructura se emprendieron

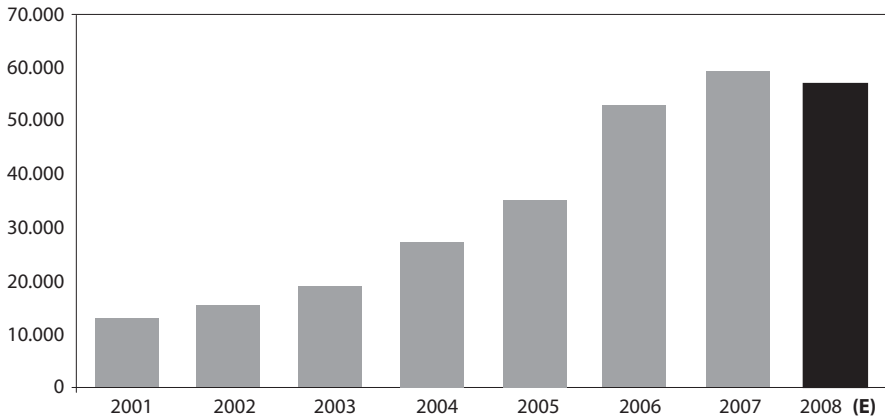
<input checked="" type="checkbox"/> Transferencias de Canon Minero a las Municipalidades Provinciales del Departamento de Ancash en 2008 Rankeadas por Totales Transferidos de Canon Minero (Montos en Nuevos Soles)				
	Municipalidad	Canon Minero	Población	Canon Minero per cápita
1	Santa -Chimbote	59,633,142	396,434	150
2	Huari	38,822,967	62,598	620
3	Huaraz	27,063,196	147,463	184
4	Casma	12,219,031	42,368	288
5	Carlos F. Fitzcarrald -San Luis	10,490,238	21,322	492
6	Huaylas -Caraz	9,590,015	53,729	178
7	Huarmey	9,478,132	27,820	341
8	Yungay	9,269,635	54,963	169
9	Pomabamba	9,231,146	27,954	330
10	Carhuaz	7,372,878	43,902	168
11	Asuncion -Chacas	3,046,427	9,054	336
12	Recuay	3,018,476	19,102	158
13	Pallasca -Cabana	2,561,312	29,454	87
14	Sihuas	2,536,903	30,700	83
15	Mariscal Luzuriaga -Piscobamba	2,488,123	23,292	107
16	Antonio Raymondi -Llamellin	2,193,015	17,059	129
17	Bolognesi -Chiquian	2,039,559	30,725	66
18	Aija	1,346,222	7,995	168
19	Corongo	922,094	8,329	111
20	Ocros	871,980	9,196	95

Fuente: MEF, Censo Nacional de Población y Vivienda 2007 - INEI

Elaboración: CAD Ciudadanos al Día

5. En 2006, durante las elecciones regionales, la presencia de Antamina en la provincia de Huari ha cambiado totalmente el acercamiento a la política. Todo esto ha sido probablemente origen de problemas, fraudes electorales y violencias que se han manifestado durante el día de las elecciones y en toda la semana siguiente, que no han permitido un normal desarrollo de las actividades electorales.

Gráfico 1: Valor de Producción Minero 2001- 2008
(Millones de soles)



Nota: El valor del 2008 ha sido estimado con datos a noviembre 2008
Fuente: MINEM; BCRP
Elaboración: Vigila Perú

también proyectos de “desarrollo”, o proyectos productivos como se los llaman en Huari.

La cantidad de dinero en las cajas municipales y la posibilidad de financiar

proyectos de distintos tipos hizo que en poco tiempo la economía urbana, así como la economía de las comunidades y centros poblados del distrito, cambiara de forma bastante veloz. En un contexto socio-económico tan nuevo, la mu-

Categorías	2006	2007	2008
Estructuras escolásticas	9	34	18
Locales comunales, plazas	5	37	30
Infraestructuras sanitarias	1	8	9
Estructuras deportivas	16	10	5
Infraestructuras urbanas	17	26	23
Infraestructuras hídricas	21	46	20
Total	81	243	156⁶

6. Los datos han sido recogidos por la estudiante Silvia Romio, véase Romio 2009.

nicipalidad provincial “va adquiriendo mayor importancia mientras que las comunidades campesinas van perdiendo terreno” (Salas Carreño 2004: pág. 385). Huari, que siempre ha tenido un papel importante en la articulación socio-económica de la zona, hoy está cambiando su cara y con esta las de sus habitantes. Igualmente la organización socio-económica de las comunidades campesinas en los alrededores de la capital provincial parece estar promoviendo un proceso de cambios internos y externos muy dependientes de los cambios procurados por la llegada del canon minero.

Antes de entrar a profundizar la temática de los cambios, nos parece necesario acercarnos a la institución de la comunidad campesina y a sus reglas internas.

La Comunidad Campesina⁷

En las comunidades campesinas reconocidas por las leyes peruanas los recursos son de propiedad comunal y el acceso a estos se determina en base a normas establecidas por el estatuto de la comunidad.

“una comunidad donde de la propiedad no existe el dueño absoluto es la comunidad pero dentro de esa los que forman la comunidad son los miembros y los miembros tienen sus parcelas que son poseedores de una cierta cantidad de

tierra, ahora por decir si uno se va a Lima y después de veinte años vuelve y quiere recuperar terrenos entonces no puede, porque no ha ejercido las funciones de los estatutos de la comunidad; cuando abandonas por mucho tiempo, se pierde, hay un limite hasta tres años que se puede quedar improductiva, de allí pierdes ser heredero dentro de la comunidad, y la tierra queda en poder de la comunidad, y de nuevo el presidente dispone de ésa” (Gaspar, Acopalla 2004).

Todo lo que se relaciona con la tierra está bajo la administración de la Junta Directiva de la comunidad (o Consejo de la Comunidad). La junta, formada por nueve miembros, es un órgano que se ocupa, entre otras funciones, de todo lo que concierne con la tierra: divisiones, gestión de los cultivos, pleitos entre comuneros y colindantes u otras comunidades.

El presidente y los miembros de la junta directiva se eligen por votación secreta de todos los comuneros activos que hayan superado los dieciocho años. El consejo convoca la Asamblea general – autoridad máxima de la comunidad campesina – una reunión de todos los “comuneros activos” cuando es necesario decidir sobre actividades económicas y comerciales que involucran las propiedades de la

7. Sobre la definición y la historia jurídica de Comunidad Campesina en Perú véase, como último resumen, Castillo- Diez-Buneo- Urrutia - del Valle 2007.

comunidad: por ejemplo vender leña de los bosques comunales para financiar la construcción de carreteras.

“Cuando hay cualquier urgencia o algún problema de la comunidad nos convocamos nos avisamos, ‘va a ver sesión’, los agentes del consejo, entonces nos reunimos hacemos acuerdo, como vamos hacer esto si no se puede solucionar formamos una asamblea con toda la comunidad, el dirigente dirige pues, la junta directiva. Para solucionar problemas comunal, problemas de terrenos con otras personas que viven en otra comunidad, que no deben entrar. Otros problemas aquí vienen de la piscigranja, de la cual una parte del dinero sirve para la comunidad, lo invierten en proyectos para toda la comunidad, carreteras, electrificación, cuando sirve algo. También hay problemas sociales que surgen dentro de la comunidad, pero son problemas mayormente para cuestiones de terrenos” (Gaspar, Acopalca 2004).

Si el consejo se ocupa de cuestiones vinculadas a la economía de la comunidad en general, existen otras autoridades que se ocupan de diferentes asuntos, en particular que se relacionan con el ciclo agrícola y ritual. En Acopalca y en Yacaya son dos, el Teniente Gobernador y el Alcalde de Centro Poblado. Ser Teniente Gobernador o Alcalde de Centro Poblado

significa “cumplir bastantes funciones”. Son primariamente ocupaciones ‘rituales’ que tienen origen en la organización local y en lo que eran los cargos instituidos por los españoles en época colonial (Pérez Galán 2001).

“el primer del año se recibe, le entregan al bastón, al poncho al sombrero, y eso sería: empiezan ellos a hacer cargo, allí también mandan a llevar chicha, comida. Después en Navidad mandan hacer chicha y preparan comida para los pastorcito que van a Huari y cuando se reciben. Después ya se preparan para carnaval, carnaval obligatorio tienen que hacer su yunta, un árbol lo plantan y lo adornan con todo tipo de flores, fruta y gastan mucho en comida, música, de todo. Después entre mayo y junio en fiesta de la santísima trinidad, allí tienen que hacer sus bailes que sea *ianqui*, *yauyo*, ya sea huanca, cualquier danza pero si yo soy teniente yo tengo que hacer, con mi propio gasto. Así también el agente municipal, todos juntos cumplen, pero más al teniente gobernador le dan este privilegio de la entrega de la tabalada. Después los agentes y los tenientes deben reunir la gente cuando el consejo manda, el presidente ordena al teniente y al agente y ellos tienen obligación de ir de casa en casa a avisar” (Marcelina, Acopalca 2005).

Sin embargo, a nivel jurídico, estas dos autoridades reflejan un tipo de potestad vinculada, en el caso del Teniente Gobernador, al gobierno central: “las capitales de departamento tendrán prefectos, las capitales de provincia subprefectos, las de distrito gobernadores y los anexos de los distritos o caseríos teniente gobernador” (Damonte 2000: pág. 111) y, en el caso del Alcalde del Centro Poblado, vinculada al gobierno local, la municipalidad distrital o provincial. Ambos deberían ser electos por sus inmediatos superiores, sin embargo las cosas funcionan diversamente: ambos son cargos obligatorios para los hombres adultos de la comunidad, a turno cada año dos hombres son investidos de estos títulos sin que la elección tenga reales vínculos con las autoridades superiores.

“Sin hacer autoridad, nadie ha muerto” (Amancio, Acopalca 2007).

El estatus de hombre adulto en Acopalca y en Yacya se alcanza no con la edad sino con la formación de un núcleo familiar, un hombre y una mujer se consideran maduros y se le confieren todos los derechos y las obligaciones cuando, teniendo pareja, construyen su casa y forman su familia.

“Se signan para el cargo apenas que se comprometen, sea mayor

de edad o menor eso no importa, los solteros no, no tienen esta obligación, aunque sea de treinta años, cuarenta años, cuando es soltero no” (Marcelina, Acopalca 2005).

Las funciones de estas autoridades, respecto al ciclo agrícola, consisten en la organización de las faenas comunales obligatorias: las faenas necesarias para el cultivo de las tierras comunales, la faena *qeru plantay* (plantar madera) para plantar árboles, las faenas de la siembra de cebada, *cebada pampay*; y la tarea para la preparación de los terrenos para la siembra *muca chacuy*⁸. El Teniente y el Alcalde son los que controlan y dirigen todo el ciclo ritual. La vida cotidiana de las dos comunidades se desarrolla en base a la organización de las actividades públicas producida por las autoridades locales en un esquema de reglas, obligaciones y derechos que todos los comuneros deben respetar, en el marco de un calendario basado en el ciclo agrícola, subrayado por eventos rituales y fiestas colectivas que marcan el tiempo a nivel individual y comunal. Estos mecanismos se producen en base a un concepto clave, el concepto de reciprocidad. Si tomamos en consideración los análisis hechos por Murra (1972) y Alberti y Mayer (1974) vemos que la reciprocidad se basa fundamentalmente en la organización del trabajo y es central

8. Aparte hay también otras faenas que deben ser organizadas por estas autoridades que son trabajos no tan vinculados al calendario sino necesarios para la comunidad como el *naniruy* el arreglo de las calles, de la escuela, de la iglesia, etc.

en la configuración del tipo de organización económica y social:

“la reciprocidad simétrica de las relaciones de producción y distribución en el interior de la comunidad, la importancia del sistema de parentesco para determinar la reciprocidad, la relación entre el control vertical de la ecología y los intercambios recíprocos y el aprovechamiento de los aspectos normativos de la reciprocidad para establecer sistemas de dominación, constituyen los hilos que unen la sociedad andina” (Alberti y Mayer 1974: pág. 21).

Estamos frente a un “ordenamiento de las relaciones entre los miembros de una sociedad, un sistema organizativo socioeconómico que regulaba las prestaciones de servicios a diversos niveles” (Rostworowski 1988: pág. 68). La reciprocidad implica un intercambio entre dos partes, no necesariamente al mismo nivel social y de poder, un intercambio que se produce en el momento en que se contrae una obligación hacia alguien que nos ha hecho objeto de una “ayuda” o “generosidad”. Murra sostiene que en

el mundo andino “la generosidad obliga, compromete alguien a la reciprocidad” (1975)⁹.

En Acopalca y en Yacya la reciprocidad se presenta en dos niveles: a nivel de relaciones entre individuos y a nivel comunal. Fonseca (1973: pág. 75) describe la primera como un “conjunto de relaciones de reciprocidad de tipo balanceado y la segunda un conjunto de relaciones de redistribución”. Esta última se vincula con las faenas que hemos mencionado antes. Además de los cargos religiosos que actualizan las redes de reciprocidad y redistribución entre parientes reales o espirituales, la reciprocidad comunal se expresa en las faenas agrícolas y de mantenimiento de la infraestructura del pueblo; trabajos colectivos a los cuales todos los representantes de cada familia de la comunidad deben participar¹⁰. La reciprocidad laboral a nivel individual involucra dos o más personas o familias y normalmente se desarrolla vinculada al trabajo agrícola. Se trata de un intercambio de trabajo o de recursos entre individuos que necesitan respectivamente ayuda. Los intercambios contribuyen a reforzar vínculos entre los que ya son parte de una misma red ‘familiar’¹¹.

9. “Definimos la reciprocidad como el intercambio normativo y continuo de bienes y servicios entre personas conocidas entre sí, en el que entre una presentación y su devolución debe transcurrir un cierto tiempo, y el proceso de negociación de las partes, en lugar de ser un abierto regateo, es más bien encubierto por formas de comportamiento ceremonial. Las partes interactuantes pueden ser tantos individuos como instituciones” (Alberti y Mayer 1974: pág. 21).

10. Incluimos los trabajos colectivos en los intercambios de reciprocidad porque se trata de tareas que cada comunero emprende para recompensar una deuda contraída con la comunidad, así como un momento en que se desarrolla la redistribución de los bienes producidos por el trabajo colectivo.

11. Aunque no sea una regla, porque existen casos de intercambios fuera de esta red, es una costumbre bastante respetada.

En el contexto de las comunidades rurales los intercambios laborales son medios fundamentales para el funcionamiento de la economía y también de la organización social. Las diferentes formas de reciprocidad no sólo permiten a cada familia enfrentar situaciones difíciles y desarrollar trabajos necesarios para su supervivencia, que de otra manera podrían ser inaccesibles; sino también delinean, en la práctica cotidiana, las reglas del sistema social definiendo los confines de las clases de edad y de género. De hecho la participación en las faenas tradicionales, por ejemplo, está vinculada a algunas características precisas, como ser hombre y adulto. La petición del intercambio se establece en base al género según lo que se necesita. El mecanismo de la reciprocidad no se limita a regular los intercambios de trabajo y el mantenimiento de la economía, no engendra sólo una reproducción económica, sino también una reproducción social interna a la comunidad, que se ‘nutre’ de las dinámicas recíprocas las cuales refuerzan y renuevan los vínculos de la red del parentesco extenso.

Cambios socioeconómicos

Las comunidades de Yacya y Acopalca, aunque de manera distinta, están desde siglos muy vinculadas a Huari, por razones históricas y culturales así como por razones socio-económicas. El gran cambio que se está experimentando en Huari por la llegada del canon minero está involucrando de manera cada vez más

fuerte a las comunidades campesinas. La presencia de “obras” así como la posibilidad de financiar proyectos de “desarrollo” ha llevado a Huari una cantidad de diferentes actores sociales y económicos que antes nunca se habían presentado en la capital. Estamos hablando de ONGs, nacionales e internacionales, sucursales de bancos, oficinas de instituciones públicas y privadas descentralizadas, etc. Además muchas personas de otros lugares están llegando a Huari desde los departamentos cercanos, desde Lima y desde la costa. Muchos huarinos que habían migrado en busca de trabajo están regresando a Huari pues ahora hay más posibilidades en Huari que en otros lugares del país: hay trabajos de mano de obra en las construcciones de infraestructura, se han generado nuevos puestos laborales para profesionales en las oficinas de la municipalidad, así como en las nuevas sucursales de empresas o instituciones y ONGs. Este contexto de cambio en la capital distrital ha intensificado también el movimiento desde las comunidades hacia Huari, migraciones temporales, desplazamientos diarios en horarios de trabajo, así como de jóvenes que desde los centros poblados menores buscan una mejor educación en las escuelas de Huari.

El poder económico, político y también simbólico desplegado por la Municipalidad de Huari, va aumentando en la medida en que aumentan los montos por canon minero y se incrementan los proyectos que generan puestos de trabajo. Sin

embargo, desde épocas coloniales Huari representa el centro de poder y el escalón más alto en las jerarquías locales, no sólo en base a razones socio-económicas y políticas¹², sino también por cuestiones que tienen que ver con la historia y la memoria oral del área que define una jerarquía de representaciones y auto-representaciones que los comuneros y los ciudadanos de Huari actualizan para relacionarse entre ellos. Esta jerarquía se define en base a categorías “étnicas” aunque no sean reales sino imaginadas y construidas contextualmente según la situación contingente (Venturoli 2009). Tradicionalmente, las relaciones entre las dos comunidades de Yacya y Acopallca con Huari se han siempre mantenido en un nivel casi antagónico -aunque con grandes diferencias entre las dos comunidades (Venturoli 2007)- en un espacio en que se expresan tensiones reales y otras cimentadas en prejuicios. Sin embargo, hoy día los lazos entre las dos realidades – pueblo y comunidades – se presentan en un proceso de cambio que parece estar llegando a una articulación de fusión entre Huari y las comunidades. El amalgama entre Huari y las comunidades se produce mediante dos elementos evidentes: por un lado viene sucediendo un fuerte crecimiento urbano de Huari, ya sea a nivel espacial con nuevas construcciones que están formando nuevos barrios (desde los 7 de cinco años atrás a los 9 de ahora) que acercan el

pueblo a los territorios de las comunidades; ya sea a nivel de implementación del pueblo con estructuras y servicios como hospital, oficinas institucionales, sucursales de los bancos, restaurantes, cabinas de Internet, etc. que atraen gente desde afuera de Huari. Por otro lado los desplazamientos temporales y las migraciones de los comuneros hacia Huari, aumentados gracias a las posibilidades de trabajo, han producido un incremento de los vínculos entre los comuneros y los huarinos, vínculos no solo a nivel laboral sino también a nivel de parentesco real y espiritual, y de participación en un espacio público compartido. Esto no significa que las diferencias y las jerarquías que delinean la sociedad de la provincia de Huari se hayan borrado, sino que se está desarrollando un ensanchamiento de los ámbitos compartidos y de relaciones entre los huarinos y los comuneros que se están apoderando de los espacios que antes eran exclusivos de los pobladores de la cabecera.

La mayor participación de los comuneros en la vida “ciudadana” implica un cambio evidente no solo en Huari, sino también dentro de las mismas comunidades.

“Ahora tenemos un problema social mayor... Quienes trabajan en las obras por la municipalidad, ganan 30 soles al día... Es un

12. “El pueblo como capital distrital o provincial sede del gobierno municipal es por definición un locus de poder, un punto de confluencia en el que dominados y dominantes «hacia arriba» coinciden” (Diez 2007: 130).

cambio mas violento! Ahora nadie quiere trabajar en el campo, y todo quiere trabajar en las obras... Ahora la gente quiere 1200 soles por la cosecha... La gente ha cambiado! Y tiene que regresar. En las dos cosas: en el campo y en aquello que puede ganar en el mercado” (Huarino 2008).

Aunque en medida diferente entre las dos comunidades, el empeño de los hombres en las obras financiadas por la municipalidad, o en otros tipos de trabajos engendrados por los recursos del canon minero, está produciendo un fuerte abandono de las chacras por parte de los comuneros, así como un cambio importante en la relación entre el comunero y la tierra. La tierra desde siempre es la razón de existir de la comunidad y el elemento clave sobre el que se construye la identidad socio-cultural de la comunidad, además de su constitución legal. De hecho la propiedad comunal de la tierra y su explotación, a través de los modos de la reciprocidad, representa uno de los fundamentos básicos de la naturaleza de la comunidad, tanto que en los estatutos de Yacya y Acopalca el abandono de la tierra por más de cinco años consecutivos comporta la pérdida del estatus de comunero activo y de todos los derechos dentro de la comunidad¹³ (Venturoli 2007). La tendencia es abandonar la agricultura, que siempre ha sido el re-

curso principal para los comuneros, a favor de otros tipos de trabajo remunerado y ocuparse de la chacra solo en los días de descanso del otro trabajo (como el fin de semana). Una tendencia que ha empezado con el abandono de las chacras más lejanas a las viviendas y que llega en algunos casos al mantenimiento de solo algunas parcelas más productivas.

El hecho que la producción agrícola, con sus tiempos de trabajo y de espera, con sus estaciones muy definidas y caracterizadas en el curso del año -además subrayadas por el ciclo ritual de las festividades muy relacionadas con el ciclo agrícola- esté perdiendo importancia significa también que está dejando espacio a un tiempo que se basa en los horarios y los turnos del trabajo remunerado. El cambio del vínculo con la tierra, nos parece, está llevando a un cambio en la percepción del tiempo y en su representación. Si el trabajo remunerado se vuelve desde un momento ocasional y esporádico en algo fijo y seguro, y resulta ser la principal ocupación y preocupación del día, y la agricultura se relega a algunos momentos limitados, la idea del tiempo basado en el ciclo agrícola muta para dejar espacio a una percepción más inmediata del tiempo. Lo que nos interesa aquí es que con esta nueva percepción del tiempo entra también una nueva concepción del trabajo y del dinero. El dinero y la economía de mercado están

13. Igualmente la nueva pareja adquiere su independencia y sus derechos dentro la comunidad en el momento en que construye la casa y recibe sus chacras.

entrando en las comunidades no sólo a través de los pocos momentos del mercado del domingo en Huari, sino como instrumento fundamental de organización de la economía y de la sociedad. Esto permite una mayor participación en la vida ciudadana pero una menor participación a la vida comunal. Las normas internas basadas en la reciprocidad y en el trabajo mutuo -antes expuestas- que permiten la reproducción social y de los vínculos entre los comuneros permitiendo la regular explotación de las chacras, van perdiendo importancia y empiezan a ser substituidas por trabajos remunerados. Ahora es muy difícil encontrar disponibilidad de los comuneros para las faenas o los trabajos recíprocos en la chacra sin contar con un presupuesto monetario. Igualmente el uso de peones pagados va substituyendo al intercambio de *minca* y *tumay*, provocando así un parcial abandono de la reciprocidad individual. Esto significa que la llegada del canon y el manejo que la municipalidad provincial está haciendo de este, están produciendo cambios en las mismas normas internas que regulan la comunidad y la vida socio-económica dentro de esta. Cambio de los cuales los comuneros y las autoridades comunales parecen estarse percatando justamente en estos días. Una de las dos comunidades, San Bartolomé de Acopalca, en diciembre 2008 llamó una asamblea general para modificar su estatuto comunal porque los comuneros empiezan a darse cuenta de la separación entre la práctica y la regla, entre cómo va cambiando

la realidad por un lado y la inmovilidad de las normas que pretenden reglamentarla. El nuevo estatuto determina nuevas medidas para la explotación de las chacras y nuevas reglas para la definición de *comunero activo* (o *calificado*, como aparece en el nuevo documento), con el fin de permitir a los comuneros que se desplazan temporalmente a Huari la posibilidad de conciliar su trabajo remunerado con la tenencia de la tierra. De hecho el estatuto precedente define muy precisamente las obligaciones de un comunero para poder disfrutar de los recursos, no solo agrícolas, de la comunidad. El nuevo estatuto subraya nuevamente, sobreponiéndose al viejo, las obligaciones que se relacionan con la participación a las faenas colectivas, a las fiestas del ciclo ritual, así como a las asambleas generales, sin embargo elimina un elemento importante en las características del comunero calificado: la obligación de la residencia en la comunidad, así como elimina la regla precedente que definía el abandono de la chacra por mas de tres años causa primera de la pérdida de la condición de comunero calificado.

Cambios políticos

Alejandro Diez en su análisis sobre organización y poderes de las comunidades campesinas del Perú afirma que "con márgenes limitados, la comunidad puede ser un efectivo articulador "hacia adentro" pero tiene serias dificultades para enlazar y conectar a las otras organiza-

ciones “hacia fuera” (Diez 2007: pág. 134). Efectivamente, en base a lo que acabamos de presentar, resulta evidente la capacidad de la comunidad de articular y manejar el cambio en las instancias internas, mediante también una revisión e innovación del estatuto que pueda adaptarse y sustentar una situación que se presenta muy diferente con respecto a solo cuatro años atrás. De manera diferente se están manejando los cambios que la descentralización y sobretodo el canon minero están llevando en el ámbito político. Es cierto, como afirma Diez, que para la comunidad, como institución, le es más difícil gestionar las dinámicas de poder “hacia afuera”, en particular en relación con el poder de la municipalidad provincial, que como hemos visto ha ido aumentando por el manejo de los fondos del canon. Aunque el último proceso de descentralización en Perú, empezado en 2002, tendría que llevar a una mayor participación ciudadana en las decisiones políticas y a una redistribución en la gestión del poder (PNUD 2006), después de seis años nos parece que las comunidades todavía no han logrado participar en el proceso de toma de decisiones, sobretodo en lo que concierne los fondos del canon minero. Esto resulta evidente si analizamos el manejo de la ley de Presupuesto Participativo por parte de las autoridades comunales.

La “Ley marco del presupuesto participativo Ley N° 28056” de 2003, debería ser un “instrumento de política y a la vez de gestión, a través del cual las autoridades regionales y locales, así como las organizaciones de la población debidamente representadas, definen en conjunto, cómo y a qué se van a orientar los recursos, teniendo en cuenta los Objetivos del Plan de Desarrollo Estratégico o Institucional, según corresponda, los cuáles están directamente vinculados a la visión y objetivos del Plan de Desarrollo Concertado” (MEF¹⁴ - DNPP¹⁵). En el texto de la ley se lee: “la Ley tiene por finalidad recoger las aspiraciones y necesidades de la sociedad, para considerarlas en los presupuestos y promover su ejecución a través de programas y proyectos prioritarios, de modo que les permita alcanzar los objetivos estratégicos de desarrollo humano, integral y sostenible. Asimismo optimizar el uso de los recursos a través de un adecuado control social en las acciones públicas” (Ley N° 28056: Artículo 3). Esta ley de intervención de la sociedad civil y de las autoridades de las comunidades y centros poblados en las directivas y decisiones de las autoridades municipales y regionales nace antes que empezaran a llegar los ingentes fondos que sólo en 2006 han empezado en llegar a Huari - gracias al aumento de los precios del cobre, extracción principal de la Compañía

14. Ministerio de Economía e Finanzas.

15. Dirección Nacional Presupuesto Participativo.

Minera Antamina presente en la provincia de Huari. Sin embargo el aumento del presupuesto del canon minero es lo que ha provocado esos cambios socio-económicos que acabamos de describir, y una situación de crecimiento de las desigualdades en el ámbito político que mayormente se delinean en la gestión de la Ley de Presupuesto Participativo por parte de la municipalidad provincial y su recepción por parte de las autoridades comunales.

En el caso de la ley del Presupuesto Participativo se evidencia perfectamente una separación entre la norma y la práctica. Si antes hemos evidenciado como una de estas comunidades está logrando la actualización de la norma para ajustarse a las necesidades actuales porque el proceso es completamente interno a la comunidad; en este caso cuando habría que llevar a cabo un proceso opuesto pero aparentemente más fácil -adecuar la práctica a la norma- éste no se verifica por el manejo que la municipalidad provincial hace de la ley. El Presupuesto Participativo manejado bien por la municipalidad provincial llevaría a una mayor autonomía de las comunidades y sus autoridades.

“Si las autoridades consultaran con el pueblo, estaría mejor. Sin embargo no hay conciencia y no son verdaderamente líderes democráticos. Ahora con el Canon Minero hay plata, hay trabajo. Así es cierto que ahora hay trabajo, y cuando están construyendo cual-

quier persona que encuentran hay peón. Pero es momentáneo, es el presente. Tu trabajo es llevar cemento para tu casa, pero es el presente” (señora de Huari, 2008).

El completo conocimiento de la ley por parte de los comuneros y sus autoridades permitiría a las comunidades decidir sobre el uso de los fondos del canon minero para la comunidad, elegir los proyectos, priorizar las necesidades y gestionar de manera muy diferente las relaciones con el exterior. Lo que ocurre en la provincia de Huari es que la municipalidad provincial, donde hasta ahora se guardan las informaciones, las competencias y los conocimientos para la gestión de los fondos del canon minero, no tiene ningún interés en transmitir estas nociones a las autoridades comunales: “¡Ellos quieren hacer su propia idea!”. En cambio pretenden evitar la fragmentación, es decir la descentralización, del poder que hasta antes de la ley de presupuesto participativo era exclusivo al municipio. Pues una ley muy “democrática” y muy “descentralizadora” como la del Presupuesto Participativo que, bien manejada, podría llevar a cabo un cambio importante en las dinámicas políticas en los contextos locales, así como a un despliegue mucho más elevado de las libertades políticas, se vuelve un instrumento de centralización de los poderes en las manos de la municipalidad provincial.

“Esto es lo que están priorizando con el Presupuesto Participativo.

Deberían consultar el pueblo, ¿No? Y esto es a lo que las autoridades se oponen, cuales es el proyecto, lo que verdaderamente sirve a la población. En esta época ya estamos a construir infraestructuras, y al final eso lo utilizan para comprar un material que no sirve...Y este Canon creo que va a durar otros diez años, y no también” (comunero, Yacya 2008).

“Entonces tenemos aquí, en el Presupuesto Participativo, en la última parte, voy empezar allí, se ha visto como uno puede mejorar su vivienda, sus chacras, sus corrales para sus animales. Pero no se, yo me preguntaría, ¿Para estas cosas también hay este apoyo por parte del Canon Minero? Porque aquí personalmente yo veo que se tiende a englobar. Casi no está llegando para todos. Hablando en si, la regidora está hablando de la cocina mejorada no mas, ¿quienes están beneficiando? Unos no mas. Si se trata de apoyar, hay que llegar a la mayoría. Me parece que todos necesitamos. Entonces por otra parte, aquí ya tenemos desagüe, pero todavía no tenemos lo que es domiciliarias. Yo quisiera pedir a ustedes: ¿Por qué no nos se dan esto apoyo? Para tener ya pues, y para usar...porque siempre estamos saliendo al campo con nuestras necesidades y no podemos. Entonces, en este caso,

yo estaba hablando antes con el alcalde del centro poblado: ¿por qué no debemos pedir?” (comunero, Yacya 2008).

La campaña de información y capacitación que la municipalidad debería llevar a cabo para permitir una participación concreta y más democrática de la gestión de los fondos del canon, en la práctica se desarrolla solamente como una suerte de condicionamiento y convencimiento de los pobladores a las decisiones tomadas en la municipalidad. De esta manera se reproduce en escala menor una forma de centralismo local donde quien maneja la información y las competencias maneja también el poder en base a su interés. La falta de intervención sobre el contexto de desigualdades sociales en que se desarrolla la acción política, por parte de los actores fuertes, no permite la emergencia de los actores menores a la escena política así como debería ser en base a la norma.

“Este conocimiento nadie nos lo va a quitar”

La frase que da el título a esta contribución la pronunció una comunera de Acopalca hablando sobre el Presupuesto Participativo y sobre la manera en que la Municipalidad Provincial está utilizando el dinero del canon minero. Los comentarios sobre la actitud de la Municipalidad de construir “obras” son bastante discordantes. Por un lado la idea de tener plazas, escuelas, locales comuna-

les, etc. renovados es algo que algunos aprecian mucho; por otro otros comuneros preferirían que la plata del canon sea usada en “proyectos productivos” y para “capacitaciones”, para adquirir “conocimientos que nadie puede quitar”.

“El Canon terminará... y cuando se termine... toda la gente se irá pobre. Cuando el Canon termine, y el sueldo actual de veinte o treinta soles llegará a diez soles, y el costo de vida descenderá” (comunero, Acopalca 2008).

La cuestión sobre proyectos productivos que producen y proveen conocimientos, también mediante capacitaciones organizadas, procede desde precedentes proyectos que algunas ONG han intentado desarrollar en las comunidades de la zona ya desde varios años. Algunos comuneros que han participado en estos proyectos se consideran “capacitados” -así se usa el termino- porque se han dado cuenta que tener una plaza nueva no puede ser una solución a los problemas económicos y sociales de la comunidad. Estos comuneros se contraponen a los demás que están felices con el local comunal y la plaza nuevos. La falta de conocimientos y de capacidad de hacer escuchar la propia voz en el momento en que habría la posibilidad de hacerlo, a través del Presupuesto Participativo por ejemplo, produce conflictos entre comuneros y algunos comuneros y las autoridades, que muy a menudo se conforman en una cultura política muy jerárquica

y vertical -que se relaciona con varios ámbitos que no son solamente aquellos políticos, como hemos visto precedentemente- en que la municipalidad provincial no solamente tiene un poder real sino también un poder simbólico que le permite manipular las decisiones en las comunidades.

El discurso sobre “los conocimientos” resulta central para entender las problemáticas principales que se relacionan con el desarrollo de la acción política en las comunidades y la relación entre ellas y la Municipalidad provincial. Quien tiene el poder es quien tiene los conocimientos de las normas jurídicas, y las capacidades para poner en práctica la norma. La ley del Presupuesto Participativo nace como arma para disminuir el clientelismo de las elites política y fomentar una participación más amplia, sin embargo la situación en la acción práctica se transforma y esta ley se vuelve un instrumento más de poder en las manos de quienes ya tienen el poder. Manejando esta ley la Municipalidad está manejando el desconocimiento y la lejanía de los comuneros desde la información de las leyes. Este fenómeno está totalmente en contra del principio primario de la descentralización es decir generar mecanismos que mejoren el sistema democrático desde la base, incorporando las responsabilidades y las voces populares (PNUD 2006). En lugar de una descentralización se produce una fragmentación de los poderes en los

centros regionales y provinciales (que muy a menudo no coordinan ni dialogan entre ellos) que no produce una ciudadanía informada, capaz de manejar las normas legales que sea el empuje hacia el desarrollo. Sin embargo el contexto socio-económico de grandes diferencias y desigualdades sociales, donde la noción de participación es algo muy lejano de la cultura política en todos los sectores sociales desde Huari hacia las comuni-

dades, una ley de este tipo no puede que asentarse sobre este tipo de terreno claramente poco fértil al desarrollo de las libertades políticas. Si bien los cambios sociopolíticos que se están ocasionando y que de alguna forma se están manejando producen tomas de posiciones que podría ser una potencial herramienta para la adquisición de los conocimientos necesarios al ejercicio de los derechos políticos.

Bibliografía

- Alkire, S. (2000) "Valuing Freedom. Sen's Capability approach and poverty reduction". New York/Oxford: Oxford University Press.
- CAD (Ciudadanos al Día), Informe CAD. Evolución del Canon Minero en Ancash, CAD, Lima, 2008.
- Castillo, P. - A., Diez - Z., Burneo - J., Urrutia - P., del Valle (editores), "¿Que sabemos de las comunidades campesinas?", Centro Peruano de Estudios Sociales, Lima, 2007.
- Comisión Permanente Del Congreso De La República, Ley marco del presupuesto participativo Ley N° 28056, Lima, 2003.
- Damonte, G., "Apuntes sobre el teniente gobernador", Págs. 109 – 124, en Ansion Juan – Alejandro Diez – Luís Mujica (editores) 2000, Autoridades en Espacios Locales. Una Mirada desde la antropología, Pontificia Universidad Católica del Perú, Fondo Editorial, Lima, 2000.
- Drydyk, J., "When is Development More Democratic?" En: Journal of Human Development, Vol. 6, No. 2, Julio. Págs. 247-267, 2005.
- Diez Hurtado, A., "Organización y poder en comunidades, rondas campesinas y municipios", Págs. 125 – 147, en Castillo, Pedro - Alejandro, Diez - Zulema, Burneo - Jaime, Urrutia - Pablo, del Valle (editores), ¿Que sabemos de las comunidades campesinas?, Centro Peruano de Estudios Sociales, Lima, 2007.
- Fonseca Martell, C., "Sistemas económicos andinos", Biblioteca Andina, Lima, 1973.
- Isbell Billie J., "To defend ourselves", Waveland Press, Inc. Illinois, 1978.
- Mayer, E. - G., Alberti (compiladores), "Reciprocidad e intercambio en los Andes peruanos", Instituto de Estudios Peruanos, Lima, 1974.
- Murra, J.V., "Formazioni economiche e politiche nel mondo andino", Einaudi, Torino, [1972] 1980.
- El mundo andino, población, medio ambiente y economía, Pontificia Universidad Católica del Perú, Instituto de Estudios Peruanos, Lima, 2002.
- Ossio Acuña, J. M., Parentesco, reciprocidad y jerarquía en los Andes, Pontificia Universidad Católica del Perú, Fondo Editorial, Lima, 1992.
- Parker, G. J. - Amancio Chavez, "Diccionario Quechua Ancash-Huailas", Ministerio de Educación, Instituto de Estudios Peruanos, Lima, 1976.
- Pérez, G., Autoridades étnicas y territorio. El ritual del "linderaje" en una comunidad andina, "Antropológica", año XIX, n. 19, pp. 365- 382, Lima, 2001.
- PNUD, Informe sobre Desarrollo Humano Perú 2006. "Hacia una descentralización con ciudadanía", Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, Oficina del Perú, Lima, 2006.
- Romio Silvia, "Partecipazione e Sviluppo": un'analisi antropologica delle pratiche politiche in un contesto delle Ande peruviane, tesis de licenciatura, Universidad de Bologna, 2009.
- Salas, G., "Política distrital, propietarios individuales e institucionalidad comunal". La administración de los fondos de la venta de tierras al Proyecto Antamina

(San Marcos, Huari, Áncash)”. Págs. 385 - 424 en: Eguren, Fernando; Remy, María Isabel y Patricia Oliart; eds. Perú: El problema agrario en debate. SEPIA X Lima: SEPIA, 2004.

Venturoli S., Vestirsi sulle Ande, “Una questione di identità”, en Davide Domenici - Alessandro Saggioro - Venturoli Sofia. America Indigena 1. Abiti Identitari,

Quaderni di Simbologia del Vestire, Edizioni Nuova Cultura Roma, 2007.

Venturoli, S., “Huarirunas, hombres grandes que dominaban a los cerros”. Historias y nuevos cambios sociales en Conchudos, Perú, PUCP, Fondo Editorial, Lima, en prensa, 2009.

VIGILA PERU, 2008, n°15, “Vigilando la descentralización”, Lima, Grupo Propuesta Ciudadana.